



ANTONIO NAVARRO

“PARA QUE TODO TENGA SENTIDO, NECESITAMOS ESPACIOS A NIVEL TERRITORIAL. ES NECESARIO DARLES EL PODER DE ELEGIR A LOS CIUDADANOS, Y EL GOBIERNO TIENE QUE EMPEZAR CON ESTE ACUERDO DE PAZ”

que insisten en pensar que se pueden investigar caso a caso las violaciones de 50 años de guerra, se están diciendo mentiras. Ahí lo que vamos a encontrar al final es una impunidad de facto. Sabemos ya que de esa manera nunca vamos a llegar al fin”. Y remató con dureza: “Estamos presenciando un espectáculo alrededor del concepto de impunidad, en unos casos de buena fe, pero en otros se trata de una serie de personas que yo llamaría ‘punitivistas de última hora’, que hace diez años estaban apoyando amnistías a grupos paramilitares y hoy quisieran ser la inquisición”, dijo.

DEBATE POR ADELANTADO

Es excepcional ver a la cúpula del Estado, desde la Justicia y el Ministerio Público, hasta el alto gobierno y el Congreso, enfrascada en un debate de este nivel en un mismo escenario (y en el foro del Externado se expresaron varias otras opiniones notables). De hecho, el auditorio universitario pareció condensar en una jornada todas las voces que, algunas con tremenda pasión o interés político, se han tomado el debate público y las páginas de los medios, en torno a las fórmulas jurídicas y políticas para poner fin al conflicto armado.

Tras el apasionado debate de si los guerrilleros desmovilizados deben pagar cárcel y pueden participar en política—algo en lo que la opinión pública hoy está ma-

yoritariamente del lado del procurador—hay una cuestión de fondo. El fin de la confrontación armada del Estado con la guerrilla y el comienzo de construcción de la paz, en términos de justicia transicional, es una ecuación en la que en un lado está la justicia y del otro la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. Solo un peso importante de estas tres últimas variables puede equilibrar una dosis generosa de justicia. Sobre todo la verdad, como dijo de visita en Bogotá el presidente alemán Joachim Gauck, cuyo país ha pasado por uno de los procesos de reconciliación más importantes de la historia.

En esto, el balón debe ponerse en el terreno de las Farc. Si siguen insistiendo en que ellas son las únicas víctimas y que la culpa de todo lo ocurrido es del Estado o de la guerra misma, la sociedad se negará mayoritariamente a cualquier generosidad con los combatientes que se desmovilicen, ni para que participen en política, ni para que eviten la cárcel.

Es cierto que, por primera vez, en su carta a los congresistas estadounidenses el mes pasado, las Farc dividieron los crímenes de la guerra en dos: el desplazamiento, los falsos positivos y la masacre de la Unión Patriótica, que atribuyen al Estado, y “casos de secuestro (por primera vez usan esta palabra), desaparición forzada, el reclutamiento (de niños), el uso de

explosivos de todo tipo, entre otros” que aceptan que deben discutirse. Pidieron, sí, tratarlos “con *sindéresis*”, pero al menos insinúan su responsabilidad. Y es cierto, también, que el Estado y estamentos privilegiados de la sociedad tendrán mucho que reconocer en un proceso de exponer la verdad de lo ocurrido en el conflicto.

Pero si las Farc no asumen ante el país sus responsabilidades como victimarios y sus deberes ante los cientos de miles de víctimas que generaron con su accionar armado, será imposible que una mayoría de la población apruebe acuerdos que contemplen abrirles las puertas de la política y medidas de generosidad jurídica a quienes abandonen las armas. Por eso, el resultado final de este debate entre paz y justicia y la decisión que tomen el Estado y la sociedad dependen, en una inmensa medida, de la actitud que adopten las Farc ante sus víctimas.

Nadie sabe, por ahora, qué actitud adoptarán las Farc. El caso es que, mientras en Cuba se discute todavía el tema agrario y apenas se anuncia en el horizonte el de participación política, Colombia ya entró de lleno en la discusión de un punto de la agenda de La Habana que allá no se ha ni mencionado aún, pero que es quizás el tema decisivo del proceso: hasta dónde quiere llegar la sociedad para poner fin al conflicto armado. ■



BALTASAR GARZÓN

“UN CRITERIO DE PRIORIZACIÓN NO ES UN CRITERIO DE IMPUNIDAD. NO CREO QUE SI AQUÍ SE PERSIGUE A 500 RESPONSABLES POR CRÍMENES ATROCES, LA CORTE PENAL VA A DECIR: ‘NO, USTEDES DEBEN PERSEGUIR A 505’”